

DURANTE 17 AÑOS:

EL APOYO DEL MUNDO

El aislamiento político internacional del régimen militar fue un hecho indesmentible. Al cabo de 17 años de dictadura los viajes al exterior de Augusto Pinochet no se caracterizaron, precisamente, por su regularidad. Por el contrario, tuvo un intento frustrado de visitar Filipinas y cuando acudió a España para los funerales de Francisco Franco, se le pidió expresamente que no se quedara a la ceremonia en que Juan Carlos I sería coronado Rey de España. La opinión que el mundo tenía del gobierno chileno era categórica: a su acceso ilegítimo al poder y a la falta de libertad se sumaban graves violaciones a los derechos humanos.

La situación se mantuvo hasta la ceremonia en que Augusto Pinochet entregaría, después de 17 años, la banda presidencial a un mandatario elegido democráticamente. A la transmisión del mando sólo llegaron dos presidentes latinoamericanos; el resto se las ingenió para arribar a Chile después de la hora que señalaba el protocolo, con el fin de evitar darle la mano al dictador chileno.

A pesar de los esfuerzos de los embajadores de Pinochet, la comunidad internacional no cejó en su protesta por los atropellos a los derechos humanos en Chile.

Estos dos hechos marcan la forma en que se comportó el mundo político, no así el financiero, con la dictadura chilena. El gobierno de Pinochet fue condenado reiteradas veces por atropellos a los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas y, además, sufrió de parte de los Estados Unidos un embargo a la venta de armas hasta que no se solucionaran los problemas derivados de la falta de libertad y

647-2

Para los que querían ver

Desde el primer día que siguió al golpe militar los organismos internacionales y los gobiernos democráticos del mundo alzaron su voz para denunciar las atrocidades que se cometían en Chile. Para muestra, botones:

En 1976 la Cruz Roja Internacional entregó al general Pinochet una lista de 893 casos de personas desaparecidas y solicitó la colaboración del gobierno chileno para obtener información.

El 16 de mayo de 1978, nuevamente la Cruz Roja envía una carta, esta vez al ex canciller Hernán Cubillos, para que el gobierno chileno colabore en la búsqueda de los desaparecidos.

En enero de 1980 la Comisión Política del Parlamento Europeo elaboró un documento en que además de condenar las violaciones a los derechos humanos en Chile, relata detalladamente dicha situación, la represión institucional, la situación social, e «invita a las autoridades chilena a respetar inmediatamente los derechos del hombre» y las insta «aclarar la situación de las personas desaparecidas por razones políticas, informar a sus familiares sobre ellas, determinar las responsabilidades de las desapariciones y castigar a los culpables».

En el informe de la OEA correspondiente a los años 1978-80 la organización internacional recomendó públicamente al gobierno chileno «adoptar las medidas necesarias para un pronto y definitivo esclarecimiento de la situación de los detenidos desaparecidos y posibilitar el regreso de todos los exiliados».

El 6 de marzo de 1979 la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acordó designar un «relator especial» sobre la situación de los DDHH en Chile.

Los mismos requerimiento anteriores (1978-80) se repitieron en el informe de la OEA referente a los años 1980-81. Insistió sobre el tema en el informe anual 1982-83, agregando que «la comisión no ha tenido conocimiento de que el gobierno chileno haya adoptado medidas tendientes a esclarecer la situación de las personas desaparecidas entre 1973 y 1978». Cuestionó abiertamente las «detenciones individuales y masivas, las relegaciones, los apremios ilegales y el trato degradante de que son víctimas los opositores en Chile».

En 1984, por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó que la situación en Chile «muestra un deterioro» mientras las autoridades «continúan negándose a cooperar con la Comisión y con el relator Especial». Manifiesta su «alarma por la impunidad de la acción represiva de los organismos policiales», «advierte con inquietud la ineficacia de los recursos de 'habeas corpus' o de amparo y protección, debido a que el Poder Judicial no ejerce plenamente sus facultades» e insta «a las autoridades chilenas a que investiguen y esclarezcan la suerte de las personas desaparecidas».

se aclarara el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier.

Por otra parte, los esfuerzos de los embajadores de Pinochet por mejorar la imagen del gobierno militar casi nunca prosperaron. Aunque para ello se llegara a la mentira infame, como fue la de Sergio Diez en la ONU cuando negó la existencia de los hermanos Maureira y otros tantos detenidos desaparecidos. Los hornos de Lonquén, que contenía los cuerpos de 14 personas desaparecidas en 1973, fueron un duro golpe para la conciencia de los chilenos. No así para Sergio Diez, actual senador de Renovación Nacional, quien dijo que tales personas no «existían» en los registros chilenos.

A estas acciones de los embajadores, sin embargo, se opuso una persistente y solidaria posición de centenares de figuras del mundo entero y muchos gobiernos que alzaron su voz para protestar contra el régimen de Pinochet. Como nunca, un gobierno fue rechazado moralmente por la comunidad internacional y recibió constantes con-

HEBE DE BONAFINI, PRESIDENTA DE LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO

«Cualquiera que lucha es nuestro hijo»

Hebe Pastor de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se opuso tenazmente a la conformación de una comisión de notables que investigara lo que había ocurrido en Argentina con miles de personas desaparecidas durante el gobierno militar. Luchaban, junto a otros organismos defensores de los derechos humanos, para que fuera el Congreso, a través de un comisión especial bicameral, quien investigara lo ocurrido. El Presidente Raúl Alfonsín, a pesar de ello, creó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas(Conadep) que presidió el escritor Ernesto Sábato y firmó un decreto para que se juzgara a las tres primeras juntas del gobierno militar. Muchas de las pruebas que sirvieron para condenar a los comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Jorge Viola, entre otros, emanaron del Informe Sábato. Parte de la verdad fue conocida en Argentina gracias a ello. Sin embargo, las Madres de Plaza de Mayo no la aceptaron. Eso, entre otras cosas, motivó su división, y su fragmentación permitió que el movimiento de los derechos humanos recibiera un duro golpe: el indulto para los responsables de la «guerra sucia».

Las Madres de Plaza de Mayo, dentro de las organizaciones de derechos humanos de Argentina, es la de mayor prestigio internacional. Su postura frente al tema, sin embargo, dista mucho de la que han adoptado organismos similares en nuestro país.

-¿Por qué no aceptaron la decisión del Presidente Alfonsín?

-Estuvimos en contra de que se conformara un organismo de las características de la Conaded porque, si bien habían figuras conocidas y respetables, no era gente jugada en la causa de los derechos humanos. Desde el inicio, nuestra agrupación no persiguió que se comprendiera nuestro dolor, sino nuestra lucha.

«Fuimos invitadas a participar, pero nos negamos a entregar virtualmente un cheque en blanco. No podíamos aceptar, y tampoco lo hacemos ahora, la idea de la muerte en sí, sino que levantamos por nuestros hijos sus ideas de vida. Nosotras damos vida con nuestras acciones. Es una suerte de socialización de la maternidad.

«Aprendimos a encontrar en otros a nuestros propios hijos, no maternalmente, sino políticamente. Cualquiera que lucha es nuestro hijo, ese al que no entendíamos, aquel al que no escuchábamos y que hablaba todo el día de política. Con ello pretendemos rendir culto a la vida y no a la muerte».

-¿No significaba un avance para ustedes que un ente creado por el presidente, democráticamente elegido por los argentinos, «oficializara» la verdad?

-En sociedades como las nuestras en que vivimos la exaltación de lo individual por sobre lo colectivo o social, estas comisiones hacen que el problema de todos lo pase a encarar cada familia particularmente, haciendo olvidar que, en nuestro caso, cada desaparecido representa a 30 mil y no tan sólo un nombre y un número de documento. No queremos recuperar los muertos, porque no representan sólo sus envoltorios sino sus ideas y una forma de ser personas. A nuestros hijos los vemos luchando, no se nos ocurre pensarlos como muertos.

«Tal vez sea una utopía, pero es nuestro



denas por sus acciones aberrantes. El Informe Rettig da cuenta que esta vez el mundo no se equivocó.

LA SOLIDARIDAD

Son muchos los nombres de países y personalidades que cumplieron un destacadísimo rol para que la tragedia chilena no fuera mayor. En la primera hora fueron los embajadores extranjeros residentes en Santiago quienes, arriesgando su propia integridad, se dedicaron a salvar vidas. Los casos más destacados, sin duda, fueron los representantes en nuestro país de Suecia, Harald Edelstam y, de Italia, Tomasso de Vergottini. Un papel destacado y solidario jugó el Obispo luterano de nacionalidad alemana, Helmut Frenz, quien junto al cardenal Raúl Silva Henríquez, es uno de los fundadores del Comité Pro Paz, que precedió a la Vicaría de la Solidaridad.

Desde el exterior los gobiernos de los países europeos, -Suecia, Noruega, Holanda, Dinamarca, Francia, Italia, Alemania, entre otros-, los organismos defensores de los derechos humanos, Danielle Mitterrand, esposa del presidente francés, las organizaciones internacionales de periodistas, etcétera, no cejaron de acompañar al pueblo chileno y fueron la caja de resonancia de las denuncias, en contra el gobierno de Pinochet, que emergían de nuestro país. Igual actitud tuvo el ex presidente Echeverría, de México, y su esposa, verdaderos ángeles tutelares de los miles de exiliados chilenos que llegaron al país del norte, papel que también jugó en Suecia el fallecido ex primer ministro de ese país, Olaf Palme. En Estados Unidos, imposible no recordar la in claudicable solidaridad del senador Edward Kennedy y del ex presidente James Carter.

Esos países y las personalidades que acompañaron el retorno a la democracia y usaron toda su fuerza para denunciar lo que en Chile ocurría, también tienen algo que decir del Informe Rettig.

Frode Nilsen, actual embajador de Noruega en Chile: «Yo espero que Chile enfrente la verdad y la justicia de acuerdo al interés del pueblo chileno. En Noruega, después de la segunda Guerra Mundial, el gobierno puso a disposición de los tribunales a los responsables de colaborar con el nazismo. De esta forma, hubo muchos condenados por traición a la patria y por las violaciones a los derechos humanos. Kuishing y sus ayudantes fueron condenados a muerte por colaborar con el nazismo. Después de algunos años hubo formas de indulto para rebajar las penas de algunos condenado por los tribunales».

Jacky Mamon, directivo de la Asociación Médicos del Mundo, en Francia: «Junto con otras organizaciones no gubernamentales esperamos con interés la publicación de este Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación. Consideramos que el establecimiento de la verdad sobre los dramáticos acontecimientos acontecidos en Chile desde 1973, es indispensable para la reconstrucción de un real estado de derecho. Muchos médicos y profesionales de la salud se encuentran entre las víctimas de la dictadura chilena. Es necesario para Chile hoy día, para estas víctimas y sus familiares, no olvidar lo que sucedió». ●

F.M.

motor. Y hoy hemos conseguido que en la Argentina se hable no de los nueve mil desaparecidos que dio el informe de Conadep, sino de los 30 mil que efectivamente son».

-¿No es utópica, a esta altura de los hechos, la frase: «Aparición con vida»?

-Es la esencia que le queremos dar a la confrontación con el sistema. Fueron revolucionarios y así queremos que se los reivindique.

«Es por esto que hasta físicamente nos oponemos a las exhumaciones. Porque queremos buscar a los asesinos, a los que mataron, a los que secuestraron, a los médicos que redactaron las actas de defunción, algunas en las cuales aparecen hasta tres causas distintas de muerte.

«Y así seguiremos por los años que sean necesarios».

-¿Cuál es el objetivo que pretenden alcanzar, ahora, transcurridos más de 10 años desde que se produjeron los hechos?

-No queremos usar a nuestros hijos como héroes sino como lo que fueron, revolucionarios. Por ello, no aceptamos reparación económica, ni exhumación, ni homenajes póstumos, ni monumentos. No queremos placas recordatorias sino el compromiso de seguir la lucha de ellos.

«En la universidad donde estaba mi hijo se hizo una placa de cristal donde se escribió el compromiso de continuar la lucha. Ese cristal será roto sólo cuando ese objetivo sea alcanzado.